

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por FLOR ELVA RESTREPO RESTREPO en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN (Radicado 05001-31-05-002-2020-00385-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Luis Carlos Melguizo Restrepo a partir del 13 de diciembre de 2018, junto con los intereses moratorios y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó con base a los siguientes fundamentos fácticos: Luis Carlos Melguizo Restrepo falleció el 13 de diciembre de 2018, mismo que como trabajador oficial vinculado al Municipio de Medellín percibía una pensión sanción reconocida por Resolución N° 10679 del 20 de agosto de 2015. Se encontraba casado con sociedad conyugal vigente con Flor Elva Restrepo Restrepo, vínculo del que procrearon dos hijos y del que se desprendió una convivencia por más de treinta años sin ruptura del

afecto marital. Por Resolución N° 201920049733, notificada el 13 de junio de 2019 se negó la pensión de sobrevivientes solicitada por no acreditarse convivencia con el causante en los últimos 5 años anteriores a la muerte, confirmada por los actos administrativos N° 201950065807 del 19 de julio de 2019 y N°201950103805 del 28 de octubre de 2019.

El MUNICIPIO DE MEDELLÍN aceptó la mayoría de los hechos expuestos, afirmando no constarle la vigencia de la sociedad conyugal y aseverando la improcedencia del derecho por no estar demostrada la convivencia de la pareja en los 5 años anteriores a la muerte del pensionado, por encontrarse separados desde 6 años atrás. Formuló los medios exceptivos de fondo que denominó como: falta de causa para pedir, falta de fundamento legal, inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe.

Surtido el trámite de rigor, el 15 de julio de 2021 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, en la que CONDENÓ al Municipio de Medellín a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Luis Carlos Restrepo Melguizo a partir del 14 de diciembre de 2018. CONDENÓ al Municipio de Medellín a reconocer y pagar la suma de \$28.070.807 correspondiente al retroactivo pensional calculado entre el 14 de diciembre de 2018 a junio de 2021, previo descuento de los aportes en salud. ORDENÓ al Municipio de Medellín que a partir del 01 de julio de 2021 continúe reconociendo una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente sin perjuicio de los incrementos de ley, incluyendo 13 mesadas por año. CONDENÓ al Municipio de Medellín a reconocer y pagar los intereses moratorios causados a partir del 16 de marzo de 2019 y hasta la fecha del pago efectivo. DECLARÓ no probada la excepción de prescripción. CONDENÓ en costas a la demandada, fijando por agencias en derecho tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La mandataria judicial de la demandada busca la revocatoria de la decisión, por considerar que en este asunto no se tienen los elementos para concluir una convivencia en calidad de esposos como lo exige la normativa aplicable, en tanto entre 6 y 10 años atrás se encontraban separados pese a la enfermedad mental del pensionado y sus problemas de alcoholismo, por lo que al no cumplirse el requisito de convivencia en los 5 años anteriores a la muerte, no hay lugar a la pensión de sobrevivientes pretendida, agregando que, para acceder a este derecho debe mantenerse el auxilio mutuo, el apoyo económico y espiritual, pues lo que se busca es proteger a quienes permanecieron con el causante sus últimos días.

La Sala igualmente en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor del Municipio de Medellín.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Luis Carlos Melguizo Restrepo como trabajador oficial (Pág. 43 Archivo 01) le fue reconocida una pensión sanción parte del Municipio de Medellín por medio de Resolución N° 10679 del 20 de agosto de 2015, mismo que falleció por causas de origen común el 13 de diciembre de 2018 (Pág. 13 Archivo 01). Que mediante Resolución N° 201950049733 del 13 de junio de 2019 le fue negada la pensión de sobrevivientes a la demandante, por no encontrar la entidad acreditado el requisito de convivencia en los 5 años anteriores al

deceso, decisión que resultó confirmada por sendos actos administrativos del 19 de julio y 28 de octubre de 2019 (Págs. 21-26, 33-36 y 43-50).

Acorde a lo anterior y el argumento de la alzada, a más de la revisión en consulta de la providencia, el problema jurídico en esta instancia se delimita a establecer si FLOR ELVA RESTREPO RESTREPO acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa de la muerte del pensionado LUIS CARLOS MELGUIZO RESTREPO ocurrida el 13 de diciembre de 2018. De ser ello así, habrá de definirse el quantum de la prestación, si hay lugar a los intereses moratorios deprecados y a las costas impuestas.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el óbito de Luis Carlos Melguizo Restrepo el 13 de diciembre de 2018, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que en su literal a) señala como beneficiarios de la prestación *“en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”*.

Así, para quien pretenda ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un

espacio de 5 años con el causante, caso que tratándose de un pensionado, no se encuadra en la discusión promovida por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia con la Corte Constitucional frente al alcance otorgado en sentencia SL1730-2020 al término de convivencia, en el que aduce que solo es exigible en caso de muerte del pensionado y no del afiliado.

Adicionalmente, dadas las circunstancias específicas del caso la H. Corte Suprema de Justicia también en su interpretación literal de la norma, le dio una especial relevancia al concepto de unión conyugal y en ese sentido, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del fallecido durante sus últimos años de vida, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso, sino en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social. Ello naturalmente, presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte vínculo afectivo, comunicación solidaria y ayuda mutua que permita considerar que los lazos familiares siguieron vigentes, señalándose por la Corporación en sentencias como la SL1869-2020 y la SL2015-2021 que ello se configura en un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b) artículo 13 Ley 797 de 2003, ya que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido, contenido e interpretación que encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto.

Se clarificó por la alta Corporación que tal postura se predica también, para cuando no existe compañera o compañero permanente al momento del

fallecimiento del afiliado o pensionado, en la medida que no sería proporcional privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Melguizo Restrepo una convivencia ininterrumpida de por lo menos 5 años anteriores a la muerte o en cualquier tiempo, encontrándose debidamente acreditada la calidad de cónyuge de la actora por medio del registro civil de matrimonios que da cuenta de su celebración dada el 06 de febrero de 1982 (Pág. 15 Archivo 01).

Para tal efecto, fue recepcionada la prueba testimonial compuesta por MARIBEL VELILLA SÁNCHEZ y MARYCEL URIBE RESTREPO, quienes coincidieron en advertir la continuada y permanente convivencia con el ánimo de forjar una comunidad de vida, presentada entre la pareja desde que acaeció el matrimonio en febrero de 1982 y hasta 8 años antes de ocurrir el deceso de Luis Carlos Melguizo en diciembre de 2018 cuando se presentó una separación por situaciones de alcoholismo del pensionado y dificultades médicas de los padres de la demandante, pero seguían siendo conocidos como esposos, pues de esa forma participaban en reuniones familiares, y Flor aun estando en casa de sus padres, como vivían a tres cuadras en el Barrio San Pablo le cocinaba a Luis Carlos y lo acompañaba a citas. Desconocen de relaciones alternas de alguno de los consortes, y de otras separaciones dadas en la vigencia del matrimonio.

De modo que, del análisis de la prueba en conjunto y a partir de los principios de la sana crítica, no puede concluirse de manera fehaciente que existió una convivencia en el sentido estricto impuesto por el legislador y la jurisprudencia hasta el momento en que ocurrió el evento desafortunado, pues patente resulta la separación de la pareja presentada desde 8 años

atrás a la data del deceso, sin que se dé cabida en el asunto, a la noción de convivencia recalcada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicado 30141 del 10 mayo de 2007, reiterada en las providencias SL12029-2016 y 4767-2021, cuando no se limita al simple hecho de residir en una misma casa, permitiendo examinarse otras circunstancias adyacentes, relativas a la existencia consciente del vínculo marital, el apoyo moral, material y efectivo y, en general, el acompañamiento espiritual permanente que de la plena convicción de que existía un proyecto mancomunado de vida como pareja y que no había sido la intención de los esposos finalizar por completo su unión matrimonial, ya que si se acude a más de los dichos de las deponentes en este escenario jurídico, a sus entrevistas rendidas junto con la demandante dentro del trámite administrativo llevado a cabo por el Municipio de Medellín (Págs. 49 y ss Archivo 07), la pareja pese a continuar una relación armonizada y amistosa, decidió separarse sin ánimo de sobrellevar una vida de esposos, pregonando la demandante que *“no estábamos juntos en el momento”* refiriéndose a la época de la muerte.

Pese a ello, al cónyuge separado de hecho o de cuerpos lo habilita para acceder a la pensión de sobrevivientes es la subsistencia del vínculo matrimonial, por lo que estando por fuera de cualquier discusión la celebración del matrimonio el 06 de febrero de 1982 sin separación surgida hasta el año 2010 aproximadamente, cuya vigencia de la unión se mantuvo hasta el fallecimiento, existe plena claridad de la satisfacción del requisito de convivencia de 5 años en cualquier tiempo, lo que deja ver que ha quedado debidamente demostrada la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante en su calidad de cónyuge separada de hecho.

En lo que atañe al monto de la pensión, se tiene que el mismo se define en un salario mínimo, sobre el que no se opuso la demandante, debiendo darse

respeto al contenido del inciso tercero del artículo 48 la Ley 100 de 1993 que pregona que en ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ya en cuanto a la fecha de disfrute de la prestación y el valor del retroactivo pensional, ha de señalarse que el derecho se encuentra causado desde el momento en que ocurrió la contingencia, esto es, el 13 de diciembre de 2018, siendo acertada la fecha del reconocimiento del derecho a partir del día siguiente, en la medida que no se permitió transcurrir el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS para que opere la prescripción, pues la reclamación ante la demandada la efectuó la demandante el 15 de enero de 2019 y la demanda fue presentada el 10 de noviembre de 2020 según acta individual de reparto.

En tales términos se tiene que el valor de las mesadas mínimas a pagar desde el 14 de diciembre de 2018 y hasta junio de 2021 con base en 13 mesadas anuales, corresponde a \$28.070.807 como lo definió el *A quo*, condena que extendida a junio de 2022 a satisfacción de lo reglado en el artículo 283 del CGP asciende a \$52.243.931 como se detalla a continuación, monto del que en efecto deben descontarse las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia SL 7061-2016, debiendo continuarse pagando a partir del 01 de julio de 2022 una mesada pensional equivalente a \$1.000.000 sin perjuicio de los incrementos de ley.

AÑO	VR. MESADA	Nº MESADA	TOTAL
2018	\$ 781.242	0,57	\$ 445.308
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	6	\$ 6.000.000
		TOTAL	\$ 52.243.931

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la entidad convocada en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que el Municipio de Medellín si tiene a su cargo los intereses moratorios pretendidos, por cuanto no es dable pregonar de su parte algunos de los eventos por los que haya de ser exonerado de este rubro según los parámetros jurisprudenciales pues se trata de la aplicación normativa contenida en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, cuya gestión indiscutidamente generó la tardanza en el reconocimiento de un derecho de la seguridad social, mismos que entonces deben ser reconocidos por el ente demandado a partir del 16 de marzo de 2019 como se determinó en la decisión de primera instancia.

Conforme a todo lo expuesto, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación y Consulta, incluidas las costas procesales impuestas.

En esta instancia las costas son a cargo del Municipio de Medellín, conforme a las prerrogativas del artículo 365-3 del CGP, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas. Costas de segunda instancia son a cargo del Municipio de Medellín, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500220200038501
Proceso: Ordinario
Demandante: FLOR ELVA RESTREPO RESTREPO
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 29/07/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 1/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario